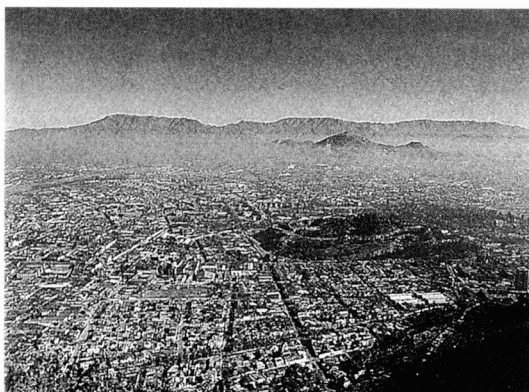


Las complejas dimensiones del Chile actual

Alberto Aggio



Tiempos de América, n° 12 (2005), pp. 3-12

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 marcó profundamente la sociedad chilena y seguramente continúa siendo una divisoria de aguas en el Chile actual. Acabó significando mucho más que el dramático “martirio”¹ del presidente Salvador Allende al optar por el suicidio en el interior del Palacio de La Moneda, después de horas de bombardeo. El golpe de Estado definió el fin de la experiencia chilena, en el que destacó, entre todas las cosas, la ausencia de una resistencia expresa de los sectores políticos y sociales que apoyaban al Presidente Allende o incluso de aquellos que habían defendido una estrategia diferente de la de él, propugnando la lucha armada o la insurrección abierta contra las estructuras del Estado chileno. Ni una cosa ni otra ocurrieron, y después de la caída de Allende, Chile vivió 17 años sometido al régimen impuesto por los militares que asaltaron La Moneda aquel día, secundados por los civiles que habían alentado y apoyado el golpe.

¿Cómo se podría comprender, entonces, todo el significado de aquel 11 de septiembre de 1973 en la historia política reciente de Chile? Hay, ciertamente, diversas formas de abordar esa cuestión. En primer lugar hay que considerar el fin del gobierno de Allende como el fracaso de un gobierno reformista conducido por la izquierda. Allende y la Unidad Popular fueron derrotados políticamente y, antes del golpe, el gobierno ya mostraba claras señales de deterioro y de incapacidad. La caída del gobierno de Salvador Allende fue, por tanto,

¹ Ese es el tratamiento asumido en TOMÁS MOULIAN: *Conversación interrumpida con Allende*, LOM/ Arcis, Santiago, 1999, especialmente pp. 21-30.

una profunda derrota política para la izquierda chilena. No obstante, es importante comprender que esa derrota no derivó del proyecto encabezado por Allende, que buscaba transitar al socialismo por medio de la legalidad y de las prácticas democráticas. La experiencia chilena no se configura, así, como prueba de que una vía democrática al socialismo sea imposible en la historia. Al contrario, ella evidenció que esa posibilidad no puede ser perseguida por la izquierda sin la construcción de consensos y de compromisos entre fuerzas políticas de distinta naturaleza o sin el fortalecimiento de instituciones que posibilitaran e hicieran posible tal consenso y dieran soporte a las transformaciones estructurales que iban siendo implantadas en su curso. También la experiencia chilena mostró que la izquierda no puede dirigir un proceso de nuevo cuño, como era ella misma, a partir de una cultura política convencional y de una estrategia de polarizaciones, aunque trabaje (retóricamente o no) vinculando las nociones de reforma y revolución.

En términos más coyunturales, se deben comprender tanto los acontecimientos del 11 de septiembre como sus desdoblamientos inmediatos, frutos del resultado de un conjunto de acciones y de factores que llevarán a la culminación de la crisis del sistema político de la democracia chilena y la consiguiente imposición de un golpe de Estado dirigido por los militares. Acto seguido, el poder militar que inauguraba el golpe dio inicio a procesos políticos de perfil revolucionario para garantizar el éxito de su contrarrevolución. Eso puede ser explicado de la siguiente forma: todo lo que se expresó como negación del gobierno de la Unidad Popular, esto es, el golpe militar y la violencia que le siguió, se presentó y se afirmó, simultáneamente, como una “dictadura revolucionaria”. Esto quiere decir que la supresión de las libertades, la coerción y el terror abierto contra los seguidores del gobierno depuesto revelaban una voluntad de poder intransigente e innegociable que se presentaba, al mismo tiempo, como una justificación necesaria para la instalación de un nuevo orden que anunciase un nuevo futuro y una nueva sociabilidad para el país. Evidenciado por la consigna del nuevo poder (“nosotros tenemos metas y no plazas”), la dictadura se afirmó, desde la coyuntura inmediatamente posterior al golpe, como un “nuevo proyecto revolucionario” destinado al éxito. En una aguda percepción de esta paradoja, Tomás Moulian afirma concluyentemente que

El régimen militar y la negación de la Unidad Popular es también una realización invertida de su idea matriz. Se apropió de elementos que se habían instalado en el imaginario social por la acción cultural de ella misma: la idea de una crisis, de la necesidad de una “gran transformación” y la valoración de una dictadura como instrumento del bien.²

Mientras tanto, a pesar de la paradoja de una contrarrevolución que se impone y se legitima por medio de procedimientos revolucionarios, y de toda violencia que procesos de esa naturaleza suscitan, lo que se estableció en Chile después de 1973 fue una dictadura construida a partir de una irreducible personalización del poder en torno al General Augusto Pinochet, sustentada por medio de un régimen autoritario con un bajo nivel de institucionalización. En ese sentido, el sistema decisorio y de producción de leyes, así como las instancias formales de deliberación, resolución e implantación de las políticas del Estado y del gobierno pasarían a estar altamente centralizadas en la figura de Pinochet, reservándose apenas espacios informales de negociación con representantes de la sociedad, especialmente del empresariado y de las fuerzas políticas que apoyaron el golpe.³

El régimen autoritario implantado en Chile a partir de 1973 duró hasta el inicio de 1990. Consiguió conducir, con éxito, significativas transformaciones en las estructuras socio-económicas del país, a pesar de que se producían profundos cambios en la cultura política chilena, que fue entonces vivida y reproducida a partir de una vigorosa y saludable revalorización de la convivencia democrática. El régimen autoritario chileno no puede ser considerado, entonces, como un “paréntesis” en la

² TOMÁS MOULIAN: “El gobierno militar: modernización y revolución”, *La forja de ilusiones: el sistema de partidos, 1930-1973*, Arcis/FLACSO, Santiago, 1993, p. 228.

³ CARLOS HUNEEUS: *El régimen de Pinochet*, Sudamericana, Santiago, 2000, pp. 625-626.

historia reciente de aquel país: después de 17 años de vigencia los chilenos pasaron a definir su convivencia a partir de otra sociabilidad. Se puede observar claramente que, desde el principio, el régimen autoritario chileno se estructuró a partir de la perspectiva fundacional que procuraba recrear la sociedad sobre nuevos pilares de sustentación. Encontraba legitimidad para esa operación en una lectura basada en el diagnóstico de que la crisis que había exigido el golpe de Estado era resultado del fracaso de la democracia y del desarrollo político verificado en las décadas anteriores. Por esa razón, los vencedores del 11 de septiembre

Se propusieron dar inicio a una nueva fase en la historia del país, para la cual establecerán metas muy ambiciosas: eliminar la pobreza, crear las bases del crecimiento económico e implantar un orden político distinto de la democracia occidental porque la consideraban débil ante el marxismo. Este (nuevo orden) sería una *democracia protegida y autoritaria*, con pluralismo limitado y sometida a la tutela de las Fuerza Armadas, que la dejarían funcionando cuando volvieran a sus cuarteles.⁴

En términos económicos, los cambios pretendieron acompañar y dar entidad a esa perspectiva fundacional. Con el objetivo de lograr que la economía volviera a crecer y de instaurar un nuevo rumbo para el capitalismo en Chile se intentó establecer una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad por medio de reformas de cuño neoliberal: privatización de empresas públicas (tanto de aquellas creadas durante el período del Frente Popular como de aquellas nacionalizadas por la Unidad Popular, después de 1970), de los servicios de salud y de previsión social, unidas a medidas relativas a la apertura comercial, al estímulo a las exportaciones y a la supresión del control de precios, etc. Con las reformas económicas que el régimen autoritario pasó a implantar acabó imponiéndose, en términos más estructurales, la llamada *alternativa global* diseñada por la derecha chilena desde mediados de los años sesenta. Ella se contraponía –como, en un tiempo, también hicieron tanto la “Revolución en libertad” expresada por el demócratacristiano Eduardo Frei como la política de la Unidad Popular del gobierno de Allende– al ciclo inaugural de la revolución pasiva chilena, que tuvo su desarrollo inicial a partir de la victoria del Frente Popular en 1938 y un efectivo desdoblamiento durante los gobiernos dirigidos por el Partido Radical, hasta 1952.⁵ Como afirmábamos en otra oportunidad, las pautas principales instituidas por los protagonistas de este nuevo ciclo de revolución pasiva en Chile fueron:

La supresión de la democracia representativa y la reorientación integral de las relaciones entre Estado y economía. Su política se concretó en dos puntos: *políticamente regresiva*, de un lado, y *prospectiva*, de otro, configurándose una mayor anticipación histórica ya configurada en América Latina, con la adopción del neoliberalismo como elemento central de reordenación del capitalismo chileno. La modalidad específica de revolución pasiva vivida en Chile, de realizaciones y déficits, encontró así su “solución clásica”: al modo de una “revolución-reaccionaria”, abrió paso al inicio de un nuevo ciclo de revolución pasiva, de perspectiva actualísima en cuanto a las tendencias contemporáneas del capitalismo mundial.⁶

En suma, se puede constatar a estas alturas un relativo consenso respecto al diagnóstico de la situación chilena después de 1973. Forma parte de ese consenso la interpretación de que el tipo de golpe influyó decisivamente en las características constitutivas del régimen posterior. Por otro lado, en virtud del hecho de que la superación del régimen autoritario en Chile se hizo efectiva por medio de un proceso bastante particular de transición, muy condicionado en su conjunto por el régimen

⁴ CARLOS HUNEUS: *El régimen de Pinochet*, p. 624 (cursiva del autor).

⁵ Señálese aquí que este análisis no está presente en el libro *Democracia e Socialismo: a experiência chilena* porque en él procurábamos delinear la trayectoria histórica de la democracia que había posibilitado la victoria de la Unidad Popular en 1970. Este análisis el lector interesado puede encontrarlo en ALBERTO AGGIO: *Frente Popular, radicalismo e revolução passiva no Chile*, Annablume, Sao Paulo, 1999.

⁶ Cf. ALBERTO AGGIO: *Frente Popular*, p. 211.

autoritario, también ha incluido en el consenso la lectura de que el carácter de la “política del autoritarismo”⁷ vendría a marcar permanentemente la nueva situación democrática a partir de marzo de 1990, año en el que Patricio Aylwin, representando a la coalición política opositora al régimen, asumió el gobierno, casi 17 años después de la caída de Allende.

UNA TRANSICIÓN CONDICIONADA POR EL RÉGIMEN AUTORITARIO

La superación de los regímenes autoritarios que se instalan en algunos países latinoamericanos entre las décadas de 1960 y 1970 no se produjo por medio de revoluciones o de insurrecciones político-sociales. La forma por la que aquellos regímenes fueron superados fue, en general, por medio de transiciones que llevaron a aquellos países a vivir el paso de situaciones de autoritarismo a situaciones de democracia. Conforme a la ya clásica caracterización de G. O’Donnell,⁸ tales procesos de transición obedecían por lo menos a dos trayectorias: en algunos casos ocurrieron por *colapso* de los regímenes autoritarios; en otros, por *pactos* o *negociaciones* entre el régimen y la oposición. Mientras Argentina puede ser mencionada como un caso ejemplar de la primera, Chile y Brasil, cada uno por motivos propios, son, seguramente, ejemplos emblemáticos de la segunda.

Pretendemos realizar aquí apenas un breve análisis del proceso de transición a la democracia desarrollado en Chile, toda vez que el tipo de transición allí establecido —enteramente condicionado por el régimen autoritario— se configuró, a nuestro parecer, como el factor explicativo más importante de las muchas dificultades a las que se enfrentaron los actores democráticos en la lucha contra aquel régimen y, también, de los diversos problemas que asolan la democracia chilena en nuestros días.⁹

El régimen autoritario, comandado por Augusto Pinochet, que se impuso al país tras el sangriento golpe de Estado de 1973, solamente fue derrotado después del fracaso de las diversas estrategias que postulaban un combate frontal contra la dictadura. Entre esas estrategias se encontraban las tentativas de acción armada contra el régimen —incluso contra el propio dictador— y también los diversos intentos de movilización de masas contra la dictadura desplegados a mediados de la década de los ochenta y que fueron conocidas como las *protestas*.¹⁰ En ambas estrategias se acariciaba la idea de que era posible derrocar a la dictadura como resultado de una acción o de un movimiento de fuerza. A fines de 1986, era absolutamente evidente la imposibilidad de derrocar a la dictadura ya fuera por la vía armada o por la lucha social de masas que había movilizó activamente a diversos sectores sociales en los tres años anteriores, especialmente a los sectores populares. La derrota del régimen autoritario debería ser perseguida por la vía política.

Uno de los elementos fundamentales que garantizó la legitimidad interna y el apoyo social de las elites empresariales y de la derecha política al régimen autoritario, a pesar de la personalización del poder en la figura de Pinochet y de la orientación económica neoliberal, fue su proyecto de institucionalización política expresada en la Carta Constitucional de 1980. Este proyecto delineado normativamente garantizaba la continuación del régimen autoritario mediante un plebiscito previsto para 1988, en el que se proyectaba la continuidad de los rasgos personalistas e institucionales del régimen autoritario. En el plebiscito de 1988 se decidiría la continuidad de Pinochet por un nuevo

⁷ Expresión usada por CARLOS HUNEEUS: *El régimen de Pinochet*.

⁸ GUILLERMO O’DONNELL Y PHILIPPE SCHMITTER: *Transições do regime autoritário; primeiras conclusões*, Vértice, Sao Paulo, 1988.

⁹ Para el análisis de la transición chilena utilizamos aquí ALBERTO AGGIO Y GONZALO CÁCERES: “Chile: processo político e controvérsias intelectuais”, *Lua Nova*, Sao Paulo, Cedec, n° 49, 2000, pp. 87-111. En este ensayo, muchas dimensiones de la transición chilena son detalladamente analizadas y discutidas.

¹⁰ FABIANA DE SOUZA FREDIGO: *Dictadura e resistência no Chile. Da democracia desejada à transição possível (1973-1989)*, UNESP, Franca, 1998. Para una visión más amplia ver PATRICK GUILLAUDAT Y PIERRE MOUTERDE: *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*, LOM, Santiago, 1998.

período de ocho años. Fue en torno a la posibilidad de politizar a favor de la oposición el plebiscito de 1988 que se fue instalando en la sociedad chilena la creencia de que se podría derrotar políticamente a la dictadura militar.

Dotada de una dirección multipartidista representada por el *Comando por el No*, la oposición política a Pinochet fue capaz de derrotar al autoritarismo, adaptándose a las reglas del juego impuestas por él. En función de los resultados electorales —44% a favor y 56% en contra— se podía interpretar de dos maneras el revés electoral sufrido por Pinochet en 1988. En primer lugar, puso fin a la pretensión de la dictadura de proyectarse hacia el futuro y, en segundo lugar, desencadenó un proceso de transición a la democracia que iría desarrollándose dentro de los plazos y de los mecanismos que, en general, había establecido el régimen.

Mientras tanto, el proceso de transición se dio con Pinochet en el centro del poder político, ejerciendo, con toda plenitud, su doble función de Presidente de la República y de Jefe de las Fuerzas Armadas. La aceptación del cronograma constitucional por parte de la oposición permitió a Pinochet gobernar más de un año y medio sin ningún contrapeso. Meses antes de la entrega del poder, sus asesores conseguirían confeccionar un pacto decisivo con los sectores de la oposición vencedores, ya entonces agrupados en la multipartidista *Concentración de los Partidos por la Democracia*. Consumado el acuerdo y refrendado mayoritariamente en un nuevo plebiscito, celebrado el 31 de julio de 1989,¹¹ se evidenció claramente que se cristalizarían, con el riesgo de perdurar *ad eternum*, una serie de *territorios reservados*, concebidos para bloquear, sin transgredir la legalidad, cualquier iniciativa reformista en materia política que se propusiera desmontar la arquitectura básica del ordenamiento jurídico-constitucional autoritario. De esa forma, la derrota electoral sufrida por Pinochet en el plebiscito de 1988, se convertiría en una victoria política estratégica en 1989, tras aprobarse solamente reformas superficiales en la Constitución de 1980.¹²

La aceptación de los cambios constitucionales que, en el fondo, condenaban a la oposición a una posición defensiva, conllevó la legitimación de aquello que se pasó a definir como *enclaves autoritarios*.¹³ Esta expresión se refiere explícitamente a elementos que pertenecen, por definición, al régimen autoritario y que perduran en la situación democrática que le sucede, impidiendo que ésta se transforme en una democracia política completa. Se trata, así, de una intervención directa por parte del régimen precedente en la expresión de la soberanía popular o de alteraciones provocadas en la vida democrática a la que aspira el país, y que continúan vigentes incluso después de haberse producido y superado lo más duro de la transición. En otras palabras, son problemas o tareas pendientes de la transición que deben ser enfrentados en un contexto de orden político post-autoritario y que limitan el carácter plenamente democrático de éste.

Tres son los tipos de *enclaves autoritarios*, cuya existencia o fuerza relativa depende del punto de partida o del tipo de transición. En primer lugar, el institucional, es decir, los elementos normativos, constitucionales y legislativos que impiden o limitan el ejercicio de la voluntad popular, el principio de representación y el gobierno efectivo de las mayorías, o mantienen las prerrogativas de las Fuerzas Armadas por encima del poder político civil (senadores designados y vitalicios; ley electoral; composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional; composición y atribuciones del Tribunal Constitucional; inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, etc.). En segundo lugar, el enclave ético-simbólico, que consiste en la permanencia o reiteración de los efectos de las violaciones de los derechos humanos sobre el conjunto de la sociedad en contextos de dictaduras militares o en situaciones de lucha armada o de guerra civil. En el caso chileno, se fortalece institucionalmente una dificultad adicional en función de las leyes de amnistía (1978) o de

¹¹ El número total de electores en los dos plebiscitos varió significativamente, siendo de 7.086.689 en 1988, y de 7.621.711 en 1989. Las reformas constitucionales fueron aprobadas en 1989 por el 85,7% de los electores.

¹² Ése es el argumento desarrollado en TOMÁS MOULIAN: "Limitaciones de la transición a la democracia en Chile" en *Proposiciones*, Santiago, 25, 1994, pp. 34-45.

¹³ M. ANTONIO GARRETÓN: *La posibilidad democrática en Chile*, FLACSO, Santiago, 1989.

la incapacidad de los poderes judiciales de hacer justicia. En tercer lugar, el enclave en la dimensión de los sujetos políticos. Se trata de personas o de grupos que se constituyen en actores sociales que, al tiempo que se definen en términos de presente o de futuro democráticos, buscan proyectar o adecuar las circunstancias que estarían vigentes en un régimen democrático a los principios y orientaciones de la dictadura precedente; en cierto sentido, esas personas o grupos van impregnando de ecos del pasado los nuevos mecanismos de perfil democrático que se instalan o, peor aún, procuran mantener la lucha por el poder a través de confrontaciones que pueden ser inclusive militares o simplemente extra-institucional.

Si se comparan las experiencias de la transición a la democracia de los demás países latinoamericanos del llamado Cono Sur podemos anotar aquí que Chile presentaba, al comenzar la década de 1990, una triple particularidad: en primer lugar, no heredaba una crisis económica del período anterior, una vez que el cambio fundamental de modelo económico y sus respectivos costos se habían producido bajo el régimen autoritario; en segundo lugar, se trataba del único caso en el que la mayoría del bloque de oposición a la dictadura se conformó como una coalición de partidos de gobierno en el inicio de la fase democrática; y, en tercer lugar, las dos ventajas anteriores se verían debilitadas por la profundidad y extensión de los *enclaves autoritarios*, lo que establecía la siguiente paradoja: en Chile se dio una de las transiciones más incompletas en convivencia simultánea con un nuevo régimen bastante consolidado.

En este sentido, la transición a la democracia en Chile tal vez sea el mejor ejemplo de un proceso político que, cuanto más avanza más se distancia de su impulso originario y sustantivo. En otros términos, cuanto más avanzaba la transición, más se iba cancelando el proceso de democratización, entendido como profundización y expresión de la participación, al mismo tiempo que se cristalizaba la imposibilidad de cualquier reforma en la estructura de la representación política de la ciudadanía. En suma, la transición democrática en Chile expresaría fuertemente la paradoja de ser simultáneamente un proceso de parálisis de la democracia, como movimiento participativo y de renovación de la vida político-institucional.

UNA BREVE REVISIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS INSTALADOS A PARTIR DE 1990

Después de suprimirse la continuidad política del autoritarismo, mostraría mejor las dificultades para la implantación de un proyecto de consolidación democrática en Chile. Como dijimos, el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) recibió un país transformado, dotado de un dinamismo económico creciente, pero con un Estado rico en *enclaves autoritarios*, restringiendo la acción gubernamental y autolimitando al gobierno en su capacidad reformadora. Iniciada la década de 1990, el llamado *modelo chileno* (un capitalismo casi sin regulaciones, apoyado en un Estado autoritario que se sustenta en mecanismos institucionales conservadores) experimentaría una doble corrección bajo la primera administración democrática. Por un lado, en consonancia con la perspectiva de “crecimiento económico con equidad social”, el gobierno se dispuso a reducir, lo más rápido posible, el tamaño de la pobreza, pero sin modificar la desigual distribución de la renta. Por otro lado, con la ayuda de ala más liberal de la oposición, se inició una gobernabilidad sustentada en la necesidad de fundarse en un *amplio consenso*, suficiente para superar una historia reciente saturada de violentos conflictos y ásperas disputas; un consenso que, entre otras dimensiones vinculadas a él, justificó el establecimiento de una tregua social que convirtió en virtualmente ilegítima a cualquier signo de reivindicación creciente que llegara de la base social con el objetivo de atenzar al Estado.¹⁴

Al mismo tiempo que se resolvía, paulatinamente, la tensión entre el gobierno y el empresariado, la urgente necesidad de alcanzar un *status quo* no conflictivo con los militares, persuadió tanto a

¹⁴ RENATO MARTINS: “Chile: a democracia e os limites do consenso”, *Lua Nova*, Cedec, Sao Paulo, 49, 2000, pp. 65-85.

la administración Aylwin como a la alianza de partidos que lo apoyaba a obtener un rápido y duradero entendimiento con lo más relevante de los poderes fácticos presentes en el escenario político. A pesar de que la rápida reciprocidad gobierno-clase política o gobierno-Iglesia Católica fue sensiblemente inferior a la conseguida con las Fuerzas Armadas, la convergencia de criterios en la evaluación entre ambos actores se fue configurando en un discurso común, inclinado a materializar un proyecto de “modernización con crecimiento” al tiempo que un proyecto de “desarrollo con democratización”.

De esta forma, ante la imposibilidad de contar con los votos de los parlamentarios del ala más liberal de la derecha política del país, el programa democratizador de la agenda gubernamental sería sustituido por otro programa que transformaría al gobierno en un celoso guardián de los equilibrios macroeconómicos. Desde entonces, la administración Aylwin asumió un papel políticamente defensivo, dilapidando el capital político alcanzado en su “período de gracia”. La opción elegida, aunque convirtiera prontamente en inviable cualquier retroceso autoritario, no logró, en la práctica, la deseada subordinación militar al poder civil.

Después de 1994, una parte de las tendencias mencionadas experimentarían una fuerte profundización. Conforme con la idea general que se había establecido en la formación política gobernante, la agenda política que organizó la presidencia de Eduardo Frei¹⁵ apostó, desde el comienzo, por un cambio de perspectiva: de la “lógica de la transición” se pasaría a la “lógica de la modernización”. Fiel a sus convicciones, el nuevo gobierno privilegió, con gran tenacidad, el proceso de modernización económico-social en detrimento de cualquier otra dimensión de la vida nacional.

Como era previsible, a lo largo de todo el período abierto por la *Concertación*, los resultados electorales alcanzados por la coalición de gobierno en las elecciones legislativas (en 1993, 55,39% de los votos, en 1997, 50,54%) no le permitieron aumentar su número de parlamentarios hasta el punto de conseguir los diversos *quorum* necesarios para realizar reformas políticas y constitucionales que permitiesen acabar con los *enclaves autoritarios*, especialmente con los senadores designados. Esta situación se agravó con la incorporación de Pinochet al Senado como parlamentario vitalicio. Ante este cuadro, la *Concentración de los Partidos por la Democracia* y también el gobierno de Frei quedaron sin estrategia para superar tales *enclaves*. La sensación predominante era la de la imposibilidad de conquistar una reforma democrática, ya porque ella había sido bloqueada, ya porque ella había fracasado.

La pérdida de votos sufrida por la *Concertación* en las elecciones parlamentarias de 1997, el debate y la tensión internas generadas por la acusación constitucional y, sobre todo, por la detención de Pinochet,¹⁶ junto a la cuestión de la democratización y reconciliación bloqueadas, generaron dudas sobre la permanencia de la alianza de gobierno. A pesar de las exiguas victorias políticas y de los diversos éxitos socio-económicos de los gobiernos de la *Concertación*, el malestar de los ciudadanos alcanzó su punto culminante entre 1998 y 1999, alimentado por el impacto de la crisis asiática y por el arraigo de un sentimiento de malestar que se cristalizaba en una sensación de frustración debido a la persistencia de los *enclaves autoritarios*, a la profundización de las desigualdades sociales (aunque estadísticamente hubiera disminuido la pobreza), y a la falta de una nueva definición del papel dirigente del Estado y de las instituciones que fortalecieran a los actores sociales, a la ciudadanía y a la sociedad civil.

¹⁵ Segundo Presidente elegido por la *Concertación*, hijo del ex presidente Eduardo Frei Montalva que gobernó Chile entre 1964 y 1970, ambos pertenecientes a la Democracia Cristiana.

¹⁶ Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 y así permaneció hasta su liberación en marzo de 2000. Pueden revisarse las dimensiones políticas, jurídicas e históricas de este episodio en JOAN ALCÁZAR: “A “inmunidad soberana” de Pinochet contestada”, *Lua Nova*, Cedec, Sao Paulo, 49, 2000, pp. 113-133.

En este escenario se desarrolló la batalla electoral para la presidencia de la República entre el fin de 1999 y los inicios de 2000. El resultado de esa disputa terminaría por llevar nuevamente a la presidencia de Chile a un político de izquierda, de perfil socialista, 27 años después de la caída de Salvador Allende. Conviene mencionar, no obstante, que después de la derrota de 1973, el socialismo chileno emprendió una profunda revisión de sus estrategias y también de su identidad.¹⁷

La campaña electoral estuvo esencialmente protagonizada por dos candidatos: Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. El primero, representando a la *Concentración de los Partidos de la Democracia*, coalición de centro-izquierda que gobernaba Chile desde el inicio de la década de 1990. El segundo, un antiguo colaborador del régimen militar que consiguió la proeza de unificar los partidos de derecha chilena (*Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional*) y, al mismo tiempo, mantenerlos distantes de la dirección de su campaña, para evitar que la sombra de la figura del ex dictador causara algún daño a su estrategia electoral. Los dos candidatos acabaron la primera vuelta prácticamente empatados. Lagos terminó en primer lugar, garantizando una victoria matemática, por estrechísimo margen, sin evitar la “victoria simbólica” de Lavín, que logró postergar el resultado final hasta la realización de la segunda vuelta. Los elementos de polarización que se habían establecido desde la primera vuelta se mantuvieron presentes hasta el final. En la segunda vuelta, por poco más de 170 mil votos, Lagos venció, quedando la distancia entre los dos candidatos en torno al 2,63% del electorado.

Chile ya había conocido elecciones tanto o más polarizadas que ésta. En 1938, el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerdá, triunfó por una diferencia de aproximadamente cuatro mil votos; en 1958, Jorge Alessandri, un candidato conservador, venció por menos de 30 mil votos al socialista Salvador Allende; y, en 1970, sería Allende quién superaría al mismo Alessandri por poco más de treinta y seis mil votos. Después de 1973, elecciones de este tipo fueron suprimidas; la “política del autoritarismo” apenas realizaba convocatorias no competitivas, como fueron la “Consulta” de 1978 y los plebiscitos de 1980 (para aprobar la Constitución) y de 1988, en el que se ambicionaba la continuidad del autoritarismo por ocho años más y la consecuente instauración de una *democracia protegida y autoritaria*. Pero recientemente, pasados 10 años de toma de posesión del primer presidente electo de la *Concertación*, por primera vez una elección presidencial precisaba de la segunda vuelta, una innovación establecida por la Constitución de 1980 para superar la histórica división en tres tercios de la política chilena, que generaba invariablemente la victoria de candidaturas minoritarias al cargo de presidente de la República.

Algunos factores explican tanto la polarización creada, como el resultado que se acabó estableciendo. Contrariamente a las elecciones anteriores ganadas por la *Concertación* (1989-1994), cuando había prosperidad económica, optimismo e incluso euforia ante los índices de crecimiento, las elecciones del 16 de enero de 2000 se realizaron en un clima de incertidumbre económica generada por el *crack* que se abatió sobre los “tigres asiáticos”, países con los cuales Chile mantenía una significativa relación comercial. Los efectos de esta crisis asiática generaron recesión y desempleo desde principios de 1998, afectando al prestigio del gobierno y de la candidatura Lagos. Por otro lado, la detención de Pinochet en Londres hizo resurgir en el interior la polarización entre izquierda y derecha, además de recolocar en el centro de la escena política el tema de los derechos humanos, uno de los principales déficits de la transición chilena. Las dificultades del gobierno de Frei para enfrentarse con eficacia a estos problemas y un cierto cansancio después de diez años de gobiernos

¹⁷ De ese proceso emerge el liderazgo político de Ricardo Lagos, especialmente después del combate político con Pinochet en el plebiscito de 1988. Sobre los cambios del socialismo chileno ver los dos volúmenes de documentación y textos de análisis de RICARDO NÚÑEZ (comp.): *Socialismo: 10 años de renovación*, Ediciones del Ornitornirco, Santiago, 1991.

concertacionistas alimentaron, como decíamos más arriba, un complejo sentimiento de malestar que incidió negativamente en la candidatura oficialista.

De esta manera, Lagos consiguió vencer en la primera vuelta ante una situación bastante adversa para el candidato oficial. Lo logró por sus innegables cualidades como líder político y también porque la *Concertación* se mantuvo unida, incluso después del cambio de hegemonía en la selección del candidato presidencial —Aylwin y Frei procedían de la Democracia Cristiana, mientras Lagos provenía del mundo socialista. Venció también porque una parcela significativa del voto de izquierda comunista todavía existente en Chile —la parte minoritaria y más nostálgica de los tiempos de la Unidad Popular—, que le faltó a Lagos para poder vencer en la primera vuelta, se sumó, en la segunda vuelta, a muchos electores que no habían concurrido a las urnas para garantizar la victoria del candidato de la *Concertación*.

Por otro lado, Joaquín Lavín se confirmó en esta elección como el principal protagonista de la derecha chilena, desbancando de este lugar a la figura de Pinochet. Ello se expresó tanto en su estrategia electoral, como en los principios fundamentales que adoptó y que le resultaron muy favorables. Lavín consiguió realizar la hazaña de alejarse de Pinochet sin perder el apoyo del pinochetismo; concentró en él la imagen de cambio, presentándose como un nuevo líder —“moderno” y pragmático, un “político no político”, un nuevo producto en el mercado electoral.¹⁸ Unificando la derecha, Lavín consiguió un resultado mejor que el de Pinochet en el plebiscito de 1988 y pasó a presentarse como el líder de la derecha más cualificado para dar a este sector una orientación para el futuro. Con Lavín, el neoliberalismo intenta homologar los fundamentos de la economía de mercado con la cultura política de la democracia. En esta construcción, la política perdería su clásica función de representación, más ligada a ideologías, valores y programas, para transformarse en una respuesta directa y permanente al ciudadano-consumidor —ese “nuevo ser” que exige respuestas concretas e inmediatas porque “paga”.¹⁹

De cualquier forma, la victoria de Lagos y su toma de posesión a principios de 2000 mantiene viva la *Concertación* como alianza política de centro-izquierda y como una coalición gobernante con gran capacidad de renovarse. Además de esto, la disputa electoral extremadamente reñida mostró el reconocimiento de la mayoría del país hacia una alianza de partidos que representa, en este terreno, la obra política más significativa que los chilenos producirán en el siglo xx. Con todo, se puede divisar también la dificultad que se presenta a Lagos para crear, como gobierno, un movimiento renovador en el interior de la continuidad. Ello define la complejidad, los límites y las posibilidades que existen en el Chile actual para una política de “reformismo fuerte y de nuevo tipo” que convoque al país para la imperiosa necesidad de buscar una salida diferente del “ultracapitalismo” impuesto al país desde la caída de Allende.

Las fuerzas democráticas que sostienen al gobierno de Lagos saben que tienen ante sí el duro desafío de enfrentarse a los asuntos pendientes de la transición negociada chilena. Buena parte de la sociedad todavía espera que se pueda recuperar un proceso de democratización que se extravió y dejó muchas de sus tareas por el camino. Pero no se puede gobernar mirando únicamente hacia atrás. La posibilidad de avanzar hacia una reforma activa de revalorización política e institucional de la democracia aún está abierta y se presenta como elemento clave del nuevo protagonismo de la izquierda chilena. Es en torno a este debate que edificará su futuro la izquierda chilena. Todo dependerá de su capacidad de convencer al conjunto de la sociedad, en los conflictos políticos cotidianos, de forma paciente y permanente, de que su proyecto civilizatorio cree un nexo virtuoso entre pasado, presente y futuro, generador de prosperidad, equidad y esperanzas para millones de chilenos.

¹⁸ EUGENIO TIRONI: *La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo*, Grijalbo, Santiago, 1999.

¹⁹ *Ibidem*.

En el Chile actual, el enigma de la relación entre democracia y socialismo –indescifrable durante el período de la Unidad Popular– parece estar desplazado; no se sabe si de momento o definitivamente. Mientras tanto, el desafío de construir una izquierda latinoamericana concebida en intrínseca relación con la democracia todavía permanece, sobre todo a partir de la experiencia práctica que se exige a un actor gobernante. Esas son, en definitiva, las razones por las cuales Chile se mantiene como una de las referencias más importantes del cambio político en América Latina.